

Bogotá, Septiembre 30 de 2013

Señor

Luis Alfredo Ramos Botero

Ex Ministro, Ex Senador, Ex Gobernador, Ex candidato Presidencial.

Actual preso por orden de la Corte Suprema de Justicia bajo cargos de presunto concierto para delinquir con el narcoparamilitarismo, conocidos como parapolítica. Ciudad.

Señor Ramos Botero:

Enfrenta usted, después de más de 10 años de evidencias, a la justicia. Lo hace gracias a que la Corte Suprema de Justicia, ante la inacción durante años de la Fiscalía y en ejercicio de sus facultades, ha acumulado abundantes y contundentes pruebas de su alianza política y mutuo beneficio con el narcoparamilitarismo.

Las evidencias hoy en manos de la justicia han corroborado con creces los modestos indicios que mi investigación social y periodística reveló hace más de 7 años: que cientos de políticos, entre ellos usted, han sido beneficiarios electorales del narcoparamilitarismo. Hoy la justicia tiene pruebas de que junto con Antonio Valencia Duque, parte de su lista al Senado en 2002, ustedes se beneficiaron del proyecto político del narcoparamilitarismo en Urabá al que llamaban “por una Uraba grande y unida”. Gracias a la contribución de esa alianza criminal-electoral su lista al Senado en 2002 obtuvo una alta votación en Antioquia y la mayor votación nacional. Por esos hechos hay varios condenados, entre ellos una de sus fórmulas al Senado en 2002, Antonio Valencia; pero usted sigue impune, hasta ahora.

Gracias a esa misma alianza criminal-electoral, su partido, Equipo Colombia, arrasó en las elecciones locales de 2003 en Urabá y obtuvo un número de votos y alcaldías nunca antes alcanzado por un sector conservador en esa región. Por esos hechos hay otros condenados; pero usted sigue impune, hasta ahora.

En ese mismo año, el 2003, apoyaron con entusiasmo la primera versión de la Ley de Justicia y Paz, llamada de Alternatividad Penal, que concedía impunidad absoluta al narcoparamilitarismo: ni un día de cárcel, ni una gota de verdad, era una amnistía total. Como no pudieron pasar esa versión de la Ley, un año después, en 2004, invitaron a los narcoparamilitares a hablar al Congreso y los recibieron como si fueran héroes de la patria y no como los brutales narcotraficantes y asesinos que son. Con la legitimidad de esa propaganda, usted y su bancada, como parte de la gran bancada uribista, impulsaron la segunda versión de la Ley de Justicia y Paz que le otorgó por primera vez en la historia de Colombia estatus político al narcoparamilitarismo. También diseñaron un sofisticado ropaje de legalidad a una impunidad disfrazada, que “reventara la Fiscalía” como se dijo entonces entre el negociador de paz y los narcoparamilitares con quienes se negoció esa Ley, en su

afán por calmarlos. Esa impunidad disfrazada, fue parcialmente desmontada gracias a la presión de la ciudadanía y al control de la Corte Constitucional que fijó los estándares de verdad, penas mínimas y reparación hoy vigentes.

En aprietos por el cambio constitucional de esa Ley, ustedes los congresistas uribistas, en particular los hoy condenados por parapolítica, hicieron todas las maromas posibles para mantener a los narcoparamilitares en el proceso de paz, entre otras cosas acudieron a la manida excusa de que ellos debían apoyar la reelección presidencial en 2006 si querían que ese proceso siguiera vivo. Lo lograron.

Hay que reconocer que fruto de esas gestiones y gracias a su habilidad política, usted logró moñona: el narcoparamilitarismo no sólo apoyó la reelección presidencial, sino también la de algunos de sus herederos de Alas-Equipo Colombia en las elecciones de Congreso de 2006, y apoyaron también su candidatura a la Gobernación de Antioquia en 2007. Por esos hechos, hay varios condenados, entre ellos sus fórmulas en la lista de Alas Equipo Colombia en 2006, Alvaro Araujo y Oscar Suárez Mira. Otros de los decisivos apoyos a su campaña a la gobernación en 2007 también están condenados, como Mario Uribe y César Pérez García, para sólo mencionar algunos de la larga lista; pero usted sigue impune, hasta ahora. Gracias a esa impunidad, durante su gobernación se cometieron gigantescos actos de corrupción y desfalco a los antioqueños, como los relacionados en el llamado Libro Blanco. La impunidad política por ese desfalco culminó en 2011, pero la impunidad disciplinaria y penal siguen rampantes, hasta ahora.

Luego de que ustedes se aseguraron la reelección en 2006 y 2007, y ante la imposibilidad de cumplir la promesa de impunidad a cambio del masivo apoyo electoral que recibieron del narcoparamilitarismo, arrancó la más peligrosa vendetta entre bandidos de la que el país tenga conocimiento. Unos y otros, narcoparamilitares y políticos, estuvieron dispuestos a todo: amenazaban públicamente, planeaban con sicarios en la Casa de Nariño chuzadas y complots contra la Corte Suprema y la Justicia, maximizaron la maquinaria de intimidación y chuzadas contra periodistas y magistrados desde el DAS, fabricaron montajes de desmovilización de frentes de las Farc para distraer la atención, etc, etc, etc. Finalmente, esa vendetta culminó con la extradición de los jefes narcoparamilitares en 2008, con la cual se sentó el peligroso precedente de que las autoridades colombianas privilegian la justicia de los drogadictos norteamericanos por encima de los colombianos víctimas de homicidio, masacres y desplazamiento.

Con mucho esfuerzo, con persistencia y valor, la justicia y las víctimas colombianas no han cesado en su empeño por lograr que los pocos narcoparamilitares en Colombia y en el exterior a los que se tiene acceso judicial colaboren con la justicia. Pocos lo han hecho, pero a pesar de la escasa colaboración, y gracias a las abundantes pruebas materiales, electorales, técnicas y testimoniales, que cruzadas y convalidadas corroboran una y otra vez, de una y otra forma, los hechos

mencionados y muchos otros que aún son materia de reserva judicial, es que usted está hoy, al fin, respondiendo ante la Justicia.

He debatido estos hechos y mis investigaciones con usted y con otros parapolíticos en diversos escenarios. He defendido y colaborado con orgullo y decisión con la Justicia, porque a diferencia de los criminales y sus políticos ni tengo ni acudo a sicarios, chequeras y chuzadas. Solo tengo mi cédula de ciudadanía, los deberes y derechos que ella me concede, y el rigor ético y profesional de mi formación.

Cuantas veces quiera y en el escenario público o judicial que sea pertinente estoy dispuesta a seguir debatiendo con usted y a seguir defendiendo y contribuyendo a la justicia de mi país. No use a su hijo para que ejerza la defensa de unos hechos de los que usted y sólo usted es el responsable. No se esconda detrás del amor filial para ocultar el prontuario político y la alianza criminal.

Claudia López
Ciudadana colombiana.
Investigadora y analista política.